

000606-18846

**DIRECCION DE FISCALIZACION Y GESTION DE  
INGRESOS**

Para responder este documento, favor citar este número 18846

Pereira, 15 de agosto de 2018

Señora

**LUISA MARIA RINCON SERNA**

URBANIZACIÓN BARAJAS, MZ 3 CS 17 POBLADO II

3105000602

PEREIRA, Risaralda

Asunto: Respondiendo a: Medio de solicitud: Correspondencia Nombres y apellidos: LUISA MARIA RINCON SERNA  
Tipo: Petición Asunto: DERECHO DE PETICIÓN . Radicado No.21173

Cordial saludo

Cordial saludo, de manera atenta me permito informarle con respecto a su solicitud de devolución radicada, en contra del literal b) del artículo tercero de la Ordenanza N° 012 de 2009, el cual ordenada el cobro de la estampilla Pro-Desarrollo, se instauró acción de grupo, demanda presentada por la Señora Sandra Liliana Aguirre Sánchez y otros, bajo el radicado 66001-33-31-003-2012-0007-00, con el fin de que se declarara administrativamente responsable al Departamento de Risaralda por el daño material que ocasionó a los miembros del grupo el cobro y pago de la estampilla Pro - Desarrollo y en consecuencia se ordene reintegrar el monto del dinero cancelado, así como los intereses moratorios y la indemnización correspondiente.

Es así como con fecha del 15 de abril de 2014, se profiere sentencia de primera instancia, declarando patrimonialmente responsable al Departamento de Risaralda por los perjuicios causados por el cobro indebido de la estampilla Pro-Desarrollo, establecidos en el literal b) del artículo 3° de la Ordenanza N° 012 de 2009, siendo condenado al Departamento al pago de perjuicios materiales a favor de los integrantes del grupo y cuyo valor debe ser entregado al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

Sentencia confirmada en segunda instancia por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el 26 de agosto de 2016.

Así mismo indica el numeral 7.3 de la sentencia de primera instancia que se debe ordenar la publicación del extracto de la sentencia en un diario de amplia circulación con la prevención a todos los interesados lesionados y que no concurrieron al proceso para que se presente al Juzgado, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación, para reclamar la indemnización.

En contra de dicha sentencia se presentó solicitud de Revisión Eventual de la sentencia de acción de grupo proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda. Solicitud que se realiza teniendo en cuenta la importancia no solo jurídica, sino, la defensa del patrimonio público dada su enorme cuantía e igualmente por no compartir las decisiones adoptadas por el Juez de Primera Instancia y el Tribunal Administrativo de Risaralda ante la

000606-18846

**DIRECCION DE FISCALIZACION Y GESTION DE  
INGRESOS**

existencia de jurisprudencia contraria. Cabe señalar que dicha solicitud fue seleccionada para revisión mediante providencia del 31 de julio de 2017, por parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado y en la revisión se confirmó lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Ahora bien, es preciso tener en cuenta, que toda vez que existe en la actualidad proceso de acción de grupo, se debe indicar que el Departamento de Risaralda pierde competencia para proceder con la respectiva devolución o pago del resarcimiento de perjuicios causado por el cobro de la Estampilla Pro-Desarrollo, toda vez que la Ley 472 de 1998 por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones, creó en su artículo 70 el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, estableciendo dentro de las funciones de dicho Fondo, la de administrar y pagar las indemnizaciones a los beneficiarios de las acciones de grupo, tal como lo dispone el artículo 71 ídem, acatando la orden proferida por el juez de conocimiento. Así mismo, dejó a cargo de la Defensoría del Pueblo el manejo del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conforme lo expresa el artículo 172 de la citada ley.

Conforme a lo anteriormente manifestado se concluye que como consecuencia de esta obligación legal, el Fondo cumple una función administradora y pagadora de indemnizaciones a los beneficiarios de acciones de grupo, contenidas en fallos de los jueces competentes y para ello se ciñe estrictamente al contenido de la sentencia que resuelve el caso y a lo dispuesto en la Constitución y la ley.

En cuanto a la integración del grupo, expresa el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, lo siguiente:

Artículo 55. Integración al grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar danos extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas.

Conforme a la normatividad transcrita se establecen dos modalidades para hacerse parte del proceso iniciado en virtud de una acción de grupo: el primero, antes de la apertura a pruebas, en la que se exprese el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al grupo; el segundo, dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la misma información y siempre que su acción no haya prescrito o caducado.

Habida cuenta de lo descrito anteriormente, se concluye que toda vez que existe de por medio una acción de grupo, en la cual se reclama el reintegro o devolución de lo pagado por la plurimencionada estampilla, el Departamento de Risaralda pierde competencia para proceder con la respectiva devolución, siendo entonces competente la Defensoría del Pueblo a través del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, previo el traslado que el Departamento le realice al citado Fondo.

Toda vez que se ha llevado a cabo el proceso de acción de grupo con el fin de obtener devolución de estampilla pro-desarrollo. Proceso judicial que se encuentra terminado y ejecutoriado y el cual fue llevado a cabo en primera

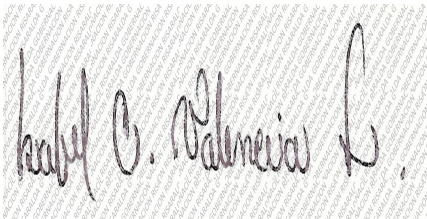
000606-18846

**DIRECCION DE FISCALIZACION Y GESTION DE  
INGRESOS**

instancia por el juzgado 3 administrativo del Circuito de Pereira, me permito manifestarle que para dicho reclamo deberá dirigirse a esa entidad judicial con el fin de proceder a realizar, las diligencias correspondientes para integrarse al grupo reclamante.

Lo anterior de conformidad con lo contenido en el artículo 65 y siguientes de la ley 472 de 1998, por la cual se desarrolla el artículo 88 de la constitución política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo.

Atentamente,



**ISABEL CRISTINA VALENCIA LOPEZ**  
Director(a) Administrativo(a) Grado 07. (e)  
DIRECCION DE FISCALIZACION Y GESTION DE  
INGRESOS

Proyectó: Sebastian Zuleta Castañeda

